



Asamblea General

Distr. general
20 de febrero de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86º período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019

Opinión núm. 77/2019, relativa a Mohamed Hassan Alim Shareef (Egipto y Sudán)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 28 de marzo de 2019 al Gobierno de Egipto una comunicación relativa a Mohamed Hassan Alim Shareef, también conocido como Mohamed Boshi. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto.
3. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo también transmitió el 28 de marzo de 2019 al Gobierno del Sudán la misma comunicación relativa al Sr. Boshi. El Gobierno respondió a la comunicación el 1 de abril de 2019. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);



d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

Antecedentes

5. Mohamed Hassan Alim Shareef, también conocido como Mohamed Boshi, es un ciudadano del Sudán nacido el 1 de enero de 1985. El Sr. Boshi es activista político y ex miembro del Partido Baaz, de la oposición. Antes de ser detenido, tenía domicilio y residencia habitual en El Cairo.

6. Según la fuente, en 2011 el Sr. Boshi fue detenido por el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad y recluso en Jartum durante varias semanas por haber criticado públicamente a un asesor del Presidente. Según se informa, durante ese período de reclusión el Sr. Boshi fue sometido a tortura, ya que le propinaron fuertes palizas y se le mantuvo en condiciones de reclusión inhumanas.

7. Además, la fuente explica que, en 2013, en el marco de las medidas de represión adoptadas por las autoridades en relación con las manifestaciones nacionales que se habían celebrado ese año, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad volvió a arrestar al Sr. Boshi y lo mantuvo en reclusión durante más de un mes. Durante ese período, el Sr. Boshi fue sometido a tortura, ya que le propinaron fuertes palizas y se le mantuvo en condiciones de reclusión inhumanas.

8. La fuente indica que, debido a las amenazas, las vulneraciones de sus derechos y la necesidad de recibir tratamiento médico por las lesiones causadas por la tortura a la que se le sometió durante su reclusión, el Sr. Boshi se trasladó a El Cairo en 2017, en donde pidió protección a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y presentó una solicitud de asilo. Desde Egipto, el Sr. Boshi siguió criticando al Gobierno del Sudán a través de los medios sociales.

Detención y reclusión en Egipto

9. La fuente informa de que, durante la noche del 6 de octubre de 2018, ocho miembros del servicio estatal de seguridad de Egipto detuvieron al Sr. Boshi en su apartamento de El Cairo sin que mediara orden judicial y sin darle ninguna explicación sobre los motivos de la detención. A continuación, fue trasladado a un lugar desconocido y recluso en régimen de incomunicación.

Privación de libertad en el Sudán

10. Presuntamente, el 9 de octubre de 2018, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad se puso en contacto con la familia del Sr. Boshi para informarles de que había sido devuelto al Sudán y estaba bajo su custodia, pero se negó a proporcionar detalles sobre su paradero. Según la fuente, esa negativa a revelar la ubicación del Sr. Boshi equivale a una desaparición forzada.

11. La fuente indica que, el 8 de noviembre de 2018, el Director del Departamento de Relaciones Exteriores del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad anunció a la prensa que la Fiscalía de Seguridad del Estado había incoado actuaciones penales contra el Sr. Boshi. Declaró que, con arreglo al Código Penal (1991), se acusaba al Sr. Boshi de participar en una asociación ilícita (artículo 21), atentar contra el orden constitucional (artículo 50), promover la guerra contra el Estado (artículo 51), realizar espionaje

(artículo 53), incitar al odio sectario (artículo 64), difundir noticias falsas (artículo 66), atentar contra la paz pública (artículo 69) y alterar el orden público (artículo 77). Además, de conformidad con la Ley de Ciberdelincuencia (2007), se acusó al Sr. Boshi de fraude y suplantación de identidad (artículo 11), atentado contra el orden público y las buenas costumbres (artículo 14) y difamación (artículo 17), a instancias del Departamento Jurídico del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad. La fuente destaca que algunos de los cargos que pesan contra el Sr. Boshi son punibles con pena de muerte.

12. La fuente informa de que, tras esa declaración, los familiares del Sr. Boshi acudieron a la comisaría de policía situada en los locales de la Fiscalía de Seguridad del Estado y solicitaron autorización para proporcionar al Sr. Boshi ropa y comida. Sin embargo, los agentes de policía les informaron de que el Sr. Boshi no estaba bajo su custodia. El 19 de noviembre de 2018, los familiares presentaron una denuncia ante el Primer Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Seguridad del Estado en la que solicitaban que se les informara del paradero del Sr. Boshi y se les permitiera comunicarse con él, pero fue en vano.

13. La fuente explica que, el 27 de noviembre de 2018, uno de los familiares del Sr. Boshi pudo visitarlo durante una hora en el centro de detención del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad en la prisión de Kober, en Jartum. Al parecer, el Sr. Boshi fue trasladado a la prisión de Kober para que se reuniera con su familia, pero fue incapaz determinar la ubicación del centro de detención en el que se le había recluso porque el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad lo esposó y le vendó los ojos durante el traslado. Desde que se produjo esa visita, no se ha permitido que su familia ni su abogado lo visiten ni vuelvan a ponerse en contacto con él. Todos los días, el abogado del Sr. Boshi ha presentado solicitudes al Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad para visitarlo. Sin embargo, el Servicio no le ha permitido nunca visitar a su cliente en prisión aduciendo que los interrogatorios seguían en curso.

14. El 7 de diciembre de 2018, el Sr. Boshi compareció ante la Fiscalía de Seguridad del Estado sin la presencia de su abogado, a quien solo se le informó de la audiencia después de que esta se hubiera celebrado.

15. Según la fuente, a pesar de que el Sr. Boshi ha sido imputado oficialmente, aún no ha sido juzgado. El Fiscal de la Seguridad del Estado ha prorrogado el régimen de prisión preventiva so pretexto de realizar investigaciones complementarias e incoar nuevas actuaciones judiciales.

Contexto general

16. Según la fuente, el caso del Sr. Boshi se produce en un contexto de reiteradas violaciones de los derechos humanos cometidas por el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad contra periodistas, activistas políticos y miembros de la oposición en el Sudán¹. La fuente afirma que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad detiene sistemáticamente a las personas que se considera se oponen a las autoridades y centra su atención, en particular, en los periodistas, los miembros de la oposición, los activistas políticos, los defensores de los derechos humanos, los estudiantes y los manifestantes pacíficos. En apoyo de esas afirmaciones, la fuente destaca las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos tras el examen del Sudán en 2018 (CCPR/C/SDN/CO/5, párr. 41). Además, la fuente alega que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad detiene sistemáticamente a personas que, posteriormente, son objeto de desapariciones forzadas, ya que se las mantiene recluidas en régimen de incomunicación por períodos que van desde unos pocos días hasta varios años. Mientras se encuentran en detención policial, las personas permanecen recluidas sin que pesen cargos en su contra, sin la posibilidad de interponer un recurso de revisión judicial y sin que se les haya enjuiciado, y se las somete sistemáticamente a tortura o malos tratos como forma de castigo o para obligarlas a firmar declaraciones autoinculpatorias.

¹ En lo que respecta a esta afirmación, la fuente se refiere al documento: African Centre for Justice and Peace Studies, “More detainees released as Sudanese authorities continue to target individuals with travel bans, arbitrary arrests and incommunicado detention”, 4 de abril de 2018. Puede consultarse en www.acjps.org/more-detainees-released-as-sudanese-authorities-continue-to-target-individuals-with-travel-bans-arbitrary-arrests-and-incommunicado-detention.

17. Según la fuente, las reiteradas vulneraciones que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad comete contra periodistas y activistas políticos en el Sudán son consecuencia directa de la falta de protección jurídica fundamental en la legislación nacional. En particular, la fuente señala que el Comité de Derechos Humanos ha declarado que el régimen jurídico que rige la detención y privación de libertad en el Sudán no es compatible con el artículo 9 del Pacto (*ibid.*, párr. 41). Por ejemplo, la fuente explica que en los artículos 50 y 51 de la Ley de Seguridad Nacional (2010) no se menciona la obligación de presentar una orden judicial para detener a una persona, ni tampoco la obligación de informar a las personas detenidas de los cargos que se les imputan ni de proporcionarles asistencia letrada. Por consiguiente, como ha señalado el Comité de Derechos Humanos, con arreglo al artículo 51 de la Ley, los sospechosos pueden permanecer privados de libertad durante un período máximo de cuatro meses y medio sin supervisión judicial (*ibid.*, párr. 41). Además, la fuente indica que, con arreglo al artículo 51, la posibilidad de que la persona privada de libertad tenga acceso al mundo exterior está supeditada a que los funcionarios encargados de la reclusión determinen que dicho acceso “no es óbice para que el interrogatorio, la indagación y la investigación avancen”.

18. La fuente señala que al Comité de Derechos Humanos le preocupaba que, con arreglo al artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, se prevea un período de detención de hasta dos semanas de duración antes de que el sospechoso sea inculcado formalmente (*ibid.*, párr. 41). Por consiguiente, la fuente alega que en el Código no se prevé la obligación de hacer que las personas detenidas comparezcan ante una autoridad judicial en un plazo de 48 horas². Además, en los artículos 4, 83 y 135 del Código no se establece explícitamente un plazo para que las personas privadas de libertad puedan ponerse en contacto con su abogado y su familia, y en ellos se dispone que dicho contacto está supeditado a la autorización de la fiscalía.

19. Además, la fuente recuerda que en el artículo 52 de la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 45 de la Ley de Policía (2008) y los artículos 34 y 42 de la Ley de las Fuerzas Armadas (2007) se dispone que los miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, la policía y las fuerzas armadas, respectivamente, gozan de inmunidad de enjuiciamiento. La fuente señala que el Comité de Derechos Humanos ha considerado que esa inmunidad es un obstáculo a un sistema general de rendición de cuentas libre de influencias políticas indebidas (CCPR/C/SDN/CO/5, párr. 37). La inmunidad solo puede revocarse a discreción de los jefes de los cuerpos respectivos, que sistemáticamente se niegan a hacerlo, sin que exista ningún recurso de revisión judicial disponible para supervisar e impugnar sus decisiones³. Esa falta de protección jurídica en la legislación nacional contrasta con el amplio mandato conferido al Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. En ese contexto, la fuente afirma que, con arreglo al artículo 24 de esa Ley, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad posee facultades amplias y vagamente definidas, tales como la protección de la seguridad nacional del Sudán, de su Constitución y “del tejido social y la seguridad de su población”, recopilar información y llevar a cabo registros e investigaciones relacionados con amenazas a la seguridad nacional, y “detectar amenazas” provenientes de actividades como “el espionaje, el terrorismo, el extremismo, la conspiración y el sabotaje”. El hecho de conferir a las fuerzas de seguridad competencias tan amplias las faculta para interferir directamente en el derecho a la libertad de opinión y expresión de los periodistas, los opositores y otros miembros de la sociedad civil. Además, en la Ley de Seguridad Nacional no se prevé el derecho de las personas a impugnar ante un órgano judicial independiente las decisiones y los actos del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad que afecten a sus derechos.

20. La fuente informa de que el Consejo de Seguridad Nacional se estableció en 2010 en virtud del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, y está presidido por el Presidente. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Seguridad Nacional, el Consejo está facultado para llevar a cabo investigaciones y para proceder a detenciones privaciones de libertad.

² Las fuentes se refieren específicamente a los artículos 4, 75, 77, 79, 80, 81 y 83 del Código.

³ La fuente se refiere a la causa presentada ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, *Monim Elgak, Osman Hummeida and Amir Suliman (represented by FIDH and OMCT) v. Sudan*, comunicación 379/09, marzo de 2014, párr. 25.

Análisis jurídico

21. La fuente recuerda que el Sr. Boshi fue detenido y sometido a desaparición forzada tras haber expresado libremente sus opiniones en los medios de comunicación y en las redes sociales, y como consecuencia directa de su obra publicada. Por lo tanto, según la fuente, la detención y la reclusión del Sr. Boshi constituyen una vulneración de su derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 19 del Pacto. Además, la fuente alega que en este caso no son aplicables las restricciones previstas en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto. Dado que el Sr. Boshi fue detenido por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, su arresto y reclusión también equivalen a una privación arbitraria de libertad en contravención del artículo 9 del Pacto.

22. Asimismo, la fuente afirma que el Sr. Boshi fue detenido sin que se le presentara ninguna orden judicial ni se le comunicaran los motivos del arresto, en contravención del artículo 9 del Pacto. Tras su detención, el Sr. Boshi fue recluso en secreto y en régimen de incomunicación, por lo que fue objeto de una desaparición forzada, lo que constituye *prima facie* una forma de detención arbitraria en contravención del artículo 9 del Pacto, tortura en contravención del artículo 7 del Pacto y una vulneración de las garantías relativas a un juicio imparcial consagradas en el artículo 14 del Pacto.

23. La fuente sostiene que, a pesar de que las autoridades reconocen haber detenido al Sr. Boshi y de que su familia pudo visitarlo una vez en la prisión de Kober, su paradero sigue siendo desconocido en el momento de presentación de la comunicación. Sobre la base de la definición de “desaparición forzada” que figura en la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que incluye las detenciones por agentes del Estado seguidas de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, la fuente afirma, por consiguiente, que el Sr. Boshi sigue sometido a una desaparición forzada en el momento de la presentación de la comunicación.

24. Por último, la fuente sostiene que, durante los períodos de reclusión previos a que se le sometiera a desaparición forzada, el Sr. Boshi fue objeto de reiterados actos de tortura que afectaron permanentemente su salud. En vista de ello, la fuente afirma que el retorno forzoso del Sr. Boshi al Sudán constituyó una vulneración por parte de Egipto de las obligaciones que le incumben en virtud del principio de no devolución, en contravención del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por consiguiente, la fuente sostiene que las autoridades del Sudán y de Egipto han infringido el artículo 7 del Pacto y, por lo tanto, son responsables de vulnerar el derecho del Sr. Boshi a no ser sometido a tortura.

Respuesta del Gobierno

25. El 28 de marzo de 2019, el Grupo de Trabajo envió una comunicación idéntica a cada uno de los dos Estados demandados.

26. El 1 de abril de 2019, el Gobierno del Sudán remitió su respuesta. En ella, confirma que el Sr. Boshi fue detenido de conformidad con el Código Penal y fue imputado, con arreglo a los artículos 50, 51, 53 y 69, por el delito de incitación al odio contra el Estado. Asimismo, el Gobierno indica que se han respetado los derechos que asisten al Sr. Boshi en virtud del Código de Procedimiento Penal.

27. El Gobierno del Sudán comunica que, cuando envió su respuesta, el juicio del Sr. Boshi estaba en curso, que la última audiencia se había celebrado el 21 de marzo de 2019, y que el Sr. Boshi estaba representado por un equipo de abogados.

28. Además, el Gobierno del Sudán afirma que, a su debido tiempo, informará al Grupo de Trabajo de la decisión del tribunal y los detalles del caso. Asimismo, el Gobierno reafirma su compromiso con todos los instrumentos de derechos humanos y su cooperación con el Grupo de Trabajo.

29. El 14 de mayo de 2019, el Gobierno de Egipto solicitó una prórroga del plazo, que le fue concedida, y se fijó un nuevo plazo hasta el 27 de junio de 2019. Sin embargo, el Gobierno no había presentado ninguna respuesta antes de la celebración del 86º período de sesiones del Grupo de Trabajo.

Observaciones adicionales de la fuente

30. Tras recibir la respuesta del Gobierno del Sudán, el Grupo de Trabajo se la notificó a la fuente. Posteriormente, la fuente presentó la información complementaria que figura a continuación.

31. La fuente informa de que se le comunicó que el Sr. Boshi había sido puesto en libertad el 15 de abril de 2019 y que se habían retirado todas las acusaciones que pesaban contra él de conformidad con una decisión adoptada por el Consejo Militar de Transición.

32. La fuente alega que no se ha proporcionado al Sr. Boshi una reparación adecuada, eficaz e inmediata ni indemnización alguna por la desaparición forzada y la detención arbitraria a las que se le sometió. La fuente solicita que la reparación incluya una indemnización por el daño físico y mental que el Sr. Boshi sufrió, por los gastos jurídicos y médicos conexos y por las oportunidades de empleo que perdió, además de plena rehabilitación física y psicológica.

33. Asimismo, la fuente sostiene que, como garantía de no repetición, la legislación y las prácticas nacionales relativas a la privación de libertad, especialmente la Ley de Seguridad Nacional y el Código de Procedimiento Penal, deben enmendarse para asegurar que se ajustan a las normas internacionales y de derechos humanos.

Deliberaciones

34. El presente caso incumbe a dos Estados Miembros. El Gobierno de uno de ellos respondió y el del otro no lo hizo. Pese a la falta de respuesta del Gobierno de Egipto, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo. El Grupo de Trabajo agradece la cooperación de la fuente y del Gobierno del Sudán.

35. El Grupo de Trabajo toma nota de la información sobre la puesta en libertad del Sr. Boshi. Sin embargo, las circunstancias del caso son tales que el Grupo de Trabajo considera que sigue siendo pertinente emitir una opinión sobre el carácter arbitrario o no de la privación de libertad, de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo.

36. El Grupo de Trabajo considera que la fuente es fiable y que el Gobierno del Sudán ha corroborado los elementos fundamentales de la información que la fuente presentó al Grupo para que la examinara, en particular la detención y la reclusión del Sr. Boshi.

37. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno de Egipto ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente, mientras que el Gobierno del Sudán ha remitido una breve respuesta sin ninguna prueba justificativa.

38. La fuente alega que el Sr. Boshi fue detenido sin que mediara una orden judicial. Ello constituye una vulneración de las obligaciones que incumben al Estado en virtud del artículo 9, párrafo 1, del Pacto. Al Sr. Boshi no se le informó con prontitud de las acusaciones que pesaban en su contra, y tuvieron que pasar aproximadamente 30 días para que se le comunicaran los cargos. Esas alegaciones contravienen lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 2, del Pacto.

39. Además, el Sr. Boshi fue recluido en régimen de incomunicación, primero en Egipto y luego en el Sudán, lo que le impidió mantener contactos con el mundo exterior, en particular con su familia y su abogado. Cabe recordar que, *a priori*, la reclusión en régimen de incomunicación es arbitraria, ya que coloca a la persona detenida fuera del amparo de la ley. En el presente caso, el Sr. Boshi también fue objeto de una desaparición forzada, primero en Egipto, durante tres días, y luego en el Sudán, durante casi un mes, ya que su familia no fue informada de su detención hasta el 8 de noviembre de 2018. Esas graves alegaciones no han sido rebatidas por ninguno de los dos Gobiernos, por lo que el Grupo de Trabajo las considera creíbles.

40. La fuente sostiene que, a la fecha de la presentación de la comunicación, el Sr. Boshi todavía no había comparecido ante un juez. El Gobierno del Sudán ha respondido a esa alegación afirmando que, en la fecha que remitió su respuesta, había un juicio en curso. Sin embargo, el Grupo de Trabajo observa que la única fecha relativa a una audiencia facilitada por el Gobierno del Sudán es el 21 de marzo de 2019, es decir, seis meses después de que se produjera la detención. Por consiguiente, el Sr. Boshi no pudo impugnar la legalidad de su detención y reclusión, y no fue llevado sin demora ante un juez, como se exige en el artículo 9, párrafos 3 y 4, del Pacto.

41. Teniendo en cuenta todas esas vulneraciones, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que la detención del Sr. Boshi en Egipto y la reclusión a la que se le sometió en Egipto y el Sudán son arbitrarias y se inscriben en la categoría I.

42. Como el Grupo de Trabajo ha observado anteriormente⁴, la libertad de expresión comprende el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. Ese derecho incluye también se refiere a la expresión y recepción de comunicaciones sobre toda clase de ideas y opiniones que puedan transmitirse a otros, incluidas las opiniones políticas. Asimismo, las restricciones permitidas a ese derecho pueden guardar relación con el respeto de los derechos o la reputación de otras personas o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos, no se permiten restricciones por motivos que no estén especificados en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto, aunque esos motivos justificasen restricciones de otros derechos protegidos por el Pacto, y las restricciones solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente con la necesidad específica de la que dependen⁵.

43. De los hechos del caso expuestos por la fuente, corroborados en parte en la respuesta del Gobierno del Sudán, se desprende que se acusó al Sr. Boshi de expresar públicamente sus opiniones sobre la política de su país del que es nacional. El artículo 19 del Pacto protege la libertad de expresión. Si bien el artículo 19, párrafo 3, prevé restricciones a la libertad de expresión en determinadas circunstancias, el Gobierno no ha presentado ningún argumento que en el presente caso justifique la aplicación de dichas restricciones. Al final, el tribunal desestimó acertadamente las acusaciones que pesaban contra el Sr. Boshi. Sin embargo, el Grupo de Trabajo aún puede concluir que la detención y la reclusión del Sr. Boshi fueron resultado del ejercicio de su libertad de expresión.

44. Además, el Grupo de Trabajo observa que el Sr. Boshi solicitó protección internacional en Egipto. Su calidad de solicitante de asilo entrañaba la prohibición de que se le trasladara a un país en el que corría un riesgo real de sufrir un daño irreparable, en este caso, el país del que huía, el Sudán, y la obligación de que el Gobierno de Egipto le concediera todas las medidas de protección previstas en el Pacto⁶. El principio de no devolución es una norma de carácter obligatorio del derecho internacional y está consagrado tanto en el derecho consuetudinario como en el de los tratados. El Grupo de Trabajo observa específicamente que Egipto es parte tanto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) como en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), en los que se prohíbe que los refugiados sean devueltos a su país. En el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece el derecho a solicitar asilo, derecho del que disfrutaba el Sr. Boshi en Egipto. Además, en el artículo 13 del Pacto se establecen específicamente las condiciones en las que un Estado parte puede expulsar a un extranjero que se halle legalmente en su territorio, que el Gobierno de Egipto no ha demostrado que se cumplan en el presente caso. Sin embargo, el Gobierno de Egipto no

⁴ Véanse las opiniones núms. 32/2019 y 16/2017.

⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y libertad de expresión, párr. 22.

⁶ Observación general núm. 31 (2004) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, párr. 10: “el disfrute de los derechos del Pacto no se restringe a los ciudadanos de los Estados Partes, sino que debe también extenderse a todos los individuos, independientemente de su nacionalidad o de su situación apátrida, como las personas en búsqueda de asilo, los refugiados, los trabajadores migrantes y otras personas, que pueden encontrarse en el territorio o estar sometidos a la jurisdicción del Estado Parte”.

solo detuvo al Sr. Boshi, sino que posteriormente lo trasladó al Sudán, donde fue detenido inmediatamente.

45. En consecuencia, no es posible considerar que las órdenes que tengan por objeto expulsar a una persona a un Estado en el que exista un riesgo real de que sea privada de libertad durante un período prolongado sin fundamento jurídico o sin que sea inculpada, o de que sea juzgada por un tribunal que claramente obedezca las órdenes del poder ejecutivo, sean compatibles con la obligación que incumbe a los Estados partes en virtud del artículo 2 del Pacto de respetar los derechos reconocidos en el Pacto y asegurar que todas las personas que se encuentren en su territorio y estén bajo su jurisdicción puedan disfrutar de ellos.

46. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad es arbitraria y se inscribe en la categoría II.

47. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Boshi es arbitraria, por cuanto se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo desea recalcar que debió haberse celebrado ningún juicio. Sin embargo, dado que el juicio se celebró, el Grupo de Trabajo examinará a continuación si las presuntas vulneraciones de los derechos relativos a un juicio imparcial y a las debidas garantías procesales revistieron suficiente gravedad para conferir a la privación de libertad del Sr. Boshi carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

48. El Grupo de Trabajo observa que la consecuencia directa del hecho de que el Sr. Boshi fuera recluido en régimen de incomunicación es que no tuvo acceso a un abogado. La fuente afirma que el Sr. Boshi no contó con asistencia letrada durante la primera audiencia en la que compareció ante la Fiscalía de Seguridad del Estado, el 7 de diciembre de 2018. Aunque el Gobierno del Sudán no respondió a esa acusación, afirmó en términos generales que se respetaron los derechos del acusado y que este contaba con un abogado. Sin embargo, en la respuesta del Gobierno no se indica la fecha en que se designó un abogado ni si el letrado interactuó de manera suficiente con el acusado. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que la información proporcionada por la fuente es creíble y concluye que se vulneró el derecho del Sr. Boshi a recibir asistencia letrada y a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, como se dispone en el artículo 14, párrafo 3 b) y d).

49. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que la vulneración del artículo 14 del Pacto reviste tal gravedad que puede considerarse que la privación de libertad es arbitraria con arreglo a la categoría III.

50. Como se ha señalado más arriba, el presente caso incumbe a dos Gobiernos y a ambos se les dio la oportunidad de presentar una respuesta. Los Gobiernos de Egipto y el Sudán cooperaron plenamente entre sí en el proceso que dio lugar a esta denuncia: el Gobierno de Egipto detuvo y recluyó al Sr. Boshi y, posteriormente, lo trasladó al Sudán, donde nuevamente se le privó de libertad. El Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que la detención y la reclusión fueron arbitrarias y se inscriben en las categorías I, II y III. El Grupo de Trabajo recuerda que es posible que otro Estado comparta la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos cuando sus acciones contribuyen a la privación arbitraria de libertad. Habida cuenta de la coordinación de las acciones llevadas a cabo por ambos Estados y de la continuidad de la privación de libertad, es lógico que ambos compartan la responsabilidad de las vulneraciones. Por consiguiente, los dos Estados tienen la obligación conjunta de proporcionar reparación al Sr. Boshi⁷.

51. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y pide a ambos Gobiernos que traduzcan y publiquen la presente opinión.

⁷ Véanse las opiniones núms. 56/2016, 53/2016 y 50/2014.

52. Por último, el Grupo de Trabajo desea expresar su preocupación por las graves vulneraciones de las normas internacionales de derechos humanos señaladas en las comunicaciones de la fuente que el Gobierno del Sudán no ha refutado. Por consiguiente, es necesario que se derogue la Ley de Seguridad Nacional a fin de garantizar la no repetición de las vulneraciones.

Decisión

53. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Mohamed Hassan Alim Shareef, conocido también como Mohamed Boshi, es arbitraria, por cuanto contraviene el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9, 13, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II y III.

54. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Egipto y al Gobierno del Sudán que adopten las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Boshi sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

55. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería conceder al Sr. Boshi el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. Además, el Gobierno del Sudán debe derogar la Ley de Seguridad Nacional vigente o modificarla para que se ajuste al derecho internacional.

56. El Grupo de Trabajo insta a ambos Gobiernos a que lleven a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Boshi y adopten las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

57. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados para que tomen las medidas correspondientes.

58. El Grupo de Trabajo solicita a los Gobiernos que difundan la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

59. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y a ambos Gobiernos que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Boshi y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Boshi;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Boshi y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Egipto y el Sudán con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

60. Se invita a los Gobiernos a que informen al Grupo de Trabajo de las dificultades que puedan haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indiquen si necesitan asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

61. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y a los Gobiernos que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

62. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁸.

[Aprobada el 21 de noviembre de 2019]

⁸ Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.